

Apuntes sobre la Crisis Fiscal y la Quiebra de Puerto Rico: Precedentes Históricos y Posibles Causas.

Las causas de la crisis fiscal y la quiebra de Puerto Rico no son recientes. Son fruto de decisiones de política pública desde 1898.

A lo largo de la historia se han ido tejiendo instituciones políticas incapaces de balancear recaudos y gastos, y una economía controlada por el sector público que no ha podido ajustar positivamente a las consecuencias de decisiones desacertadas por parte del Congreso de los Estados Unidos. Por eso, las raíces de la llamada crisis fiscal de la isla están mucho más ligadas al pasado que lo que una gran mayoría imagina.

Estados Unidos ocupó Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana de 1898. Removieron al nuevo gobierno autónomo establecido en 1897 bajo el régimen de España, eliminaron sus poderes e impusieron un régimen controlado por gobernadores militares¹.

En abril de 1900, el Congreso aprobó el Foraker Act, que restauró un cierto tipo de gobierno civil. Esta ley permitió la creación de una cámara legislativa baja, electa por el pueblo, un gobernador y una cámara legislativa alta, llamada Consejo Ejecutivo, nombrados por el presidente de los Estados Unidos². Como resultado de ello, la isla quedó con menos autonomía que bajo el gobierno español.

¹ Mark Joffe, Jesse Martínez, El Origen de la Crisis Fiscal de Puerto Rico, Mercatus Research, George Mason University, April, 2016.

² Puerto Rico Foraker Act, sec. 14, 31 Stat. at 80 (1900).

Estados Unidos estableció una serie de estructuras gubernamentales, mayormente no electas por el pueblo, distinto a otros territorios, lo que derivó en menos autonomía que la incipiente bajo el poder peninsular al ocurrir la invasión de 1898.

El Congreso de los Estados Unidos trató a Puerto Rico distinto a otros territorios.

Por ejemplo, en los entonces territorios, Arizona, Nuevo México y Oklahoma, todos los cuerpos legislativos eran electos por el pueblo.

Por otra parte, el Hawaiian Organic Act, que también se aprobó en abril de 1900, estableció en Hawái un gobierno territorial donde ambas cámaras legislativas eran electas. Igual que Puerto Rico, Hawái era un territorio ultramarino anexo por los Estados Unidos en el año 1898³.

Cabe señalar, sin embargo, una diferencia entre Hawái y Puerto Rico, y es que la primera contaba con una clase dirigente anglosajona antes de que se diera la anexión.

Por lo tanto, la diferencia entre las respectivas constituciones de los territorios señalados aparenta haber sido de naturaleza discriminatoria.

Ante la primera guerra mundial y las presiones del reclutamiento militar, el Congreso aprobó el Jones-Shafroth Act en el año 1917⁴, la cual otorgó la ciudadanía estadounidense a cualquier ciudadano de Puerto Rico que no la rechazara explícitamente. La nueva ley también reemplazó al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, que no era electo democráticamente, por un Senado que sería elegido por el pueblo. Una de las disposiciones del Jones-Shafroth Act tuvo una serie de consecuencias que no aparentan haber sido previstas y que aún repercuten.

³ Mark Joffe, *supra*.

⁴ Jones Act, 39 Stat. 951 (1917).

Esta ley eximía de interés a los bonos de Puerto Rico de los impuestos sobre ingresos a nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos, lo que hizo que los bonos municipales de Puerto Rico fueran muy atractivos para los inversionistas a través de todo el país, promoviendo el endeudamiento de la isla.

Al mismo tiempo, la ley limitaba la cantidad que el gobierno podía tomar prestado al 7 por ciento del total del valor estimado de la propiedad inmueble de Puerto Rico, no de las rentas o ingresos del gobierno.

Tres años después que se aprobara el Jones-Shafroth Act, se aprobó la Merchant Marine Act de 1920, (“Ley de Cabotaje”)⁵ que impide que una flota de bandera extranjera transporte bienes entre los Estados Unidos continentales y los territorios de ultramar como Puerto Rico.

El impacto de esta ley en Puerto Rico, Guam, Alaska y Hawái fue, y continúa siendo, que sea más caro el envío de mercancía, lo que aumenta tanto el costo de los bienes para los consumidores de los territorios de ultramar, como el precio de los productos que se envían a los Estados Unidos continentales.

Desde la ocupación norteamericana, Puerto Rico, es objeto de una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le clasificaron como un territorio no incorporado, sujeto a la cláusula territorial de la Constitución norteamericana, bajo la cual la metrópoli está facultada a legislar, gobernar y reconocer o no derechos, de forma distinta a los estados de la unión americana. Estos casos, unidos a otros casos recientes como *Pueblo vs. Sánchez Valle*, 579 US 59 (2016) -que desmiente la existencia de un Estado Libre Asociado, defendida en múltiples ocasiones por

⁵ Merchant Marine Act, 1920, 46 USC App. Chap 24.

Estados Unidos ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas- tienen visos claramente discriminatorios, han tenido y tienen un grave impacto en la gobernanza de la isla, ya que el Pueblo no podrá tomar una serie de decisiones trascendentales para su bienestar económico y social sin los obstáculos y cortapisas del gobierno federal⁶⁷.

La relación política de Puerto Rico con Estados Unidos ha limitado a lo largo de la historia la capacidad de Puerto Rico para diseñar muchas políticas económicas que potencialmente puedan desarrollar al País y mantener niveles aceptables de deuda pública vis a vis el Producto Nacional Bruto ("PNB"), y el ideal de una inversión aceptable en infraestructura.

A pesar de la indudable relación entre el estado colonial y el surgimiento de una deuda fiscal inaceptable, cabe señalar que hay periodos donde la deuda fue en descenso (1977-1987), tanto si se considera la deuda real como si se observa la deuda en proporción al PNB. Esa aparente anomalía histórica, amerita mayor investigación. Por las limitaciones de este trabajo no se abordará.

Algunos analistas sostienen que el efecto mayor que tiene el estatus colonial no es como causa exclusiva del endeudamiento sino como obstáculo para la solución al

⁶ Balzac vs. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922)
California vs. Torres, 435 U.S. 1 (1978)
Dorr vs. U.S.A., 195 U.S. 138 (1904)
Downes v. Bidwell, 182 U.S. 282 (1901)
Harris v. Rosario, 446 U.S. 1 (1978)
Hawaii vs. Markichi, 190 U.S. 197
Morales v. Bd. of Registration, 33 PRR 76 (1924)
Pueblo v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016)
Torres vs. Puerto Rico, 442 U.S. 465, 470-473 (1979)

⁷ Gustavo Gelpí, Los Casos Insulares: Un estudio Histórico Comparativo de los Casos de Puerto Rico Hawaii y las Islas Filipinas, Revista Jurídica U.I.A.P.R., vol. XLV 2:215.

mismo. Por ejemplo, si Puerto Rico tuviese soberanía se podría aplicar la ley de quiebra legislada localmente (Ley 71 de 2014) (derogada), para reestructurar organizadamente la deuda o podría buscarse la asistencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional⁸.

La negativa del Gobierno federal a que Puerto Rico pueda establecer mecanismos específicos para reestructurar organizadamente su deuda (aparte de la Junta de Control Fiscal ya creada) es un ejemplo de la falta de soberanía del Pueblo de Puerto Rico para lidiar con sus acreedores. Estados Unidos, de hecho, se inmiscuye en los mecanismos de repago de la deuda sin hacerse responsable de ninguna porción de la misma.

Por otra parte, en la actualidad, los gobiernos estatales de los Estados Unidos pueden autorizar sus instrumentalidades públicas a acogerse a la ley federal bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal,⁹. No obstante, en 1984, Puerto Rico fue excluido de forma discriminatoria del concepto “estado” para propósitos del Capítulo 9, por lo que el gobierno de Puerto Rico no tiene la potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal. Ante la imposibilidad de optar por el marco legal federal de quiebras, en julio de 2014, la actual administración de Puerto Rico aprobó la Ley 71 del 2014, titulada “Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, popularmente conocida como la “Ley de Quiebra Criolla”, mediante la cual buscaba autorizar a ciertas corporaciones públicas a reestructurar

⁸ Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico, 4 de abril de 2016.

⁹ 11 U.S. Bankruptcy Code, Chapter 9.

sus deudas¹⁰. Un sinnúmero de compañías que custodian fondos buitres y dueñas de bonos de Puerto Rico demandaron al gobierno en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico alegando que la Ley violaba tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico. Esas empresas, probablemente no habrían podido demandar en el contexto de una petición de quiebra, donde operaría la paralización automática de ese tipo de procedimiento una vez se presenta la petición de quiebra.

Como sabemos, los tribunales federales; de primera instancia y apelativos resolvieron a favor de los bonistas y concluyeron que la “Ley de Quiebra Criolla” invade lo que es campo ocupado por el Código de Quiebras federal, y, por tanto, es inválida bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos¹¹.

Estas decisiones judiciales tuvieron el efecto de detener la implementación del estatuto, o cualquier otro similar, para reestructurar la deuda, dejando a Puerto Rico sin herramientas legales para poder lograr un justo balance entre los intereses de los bonistas, el problema de liquidez de sus corporaciones y su deber de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía, tales como educación, vivienda, trabajo y seguridad, desarrollo económico y otros.

Distintos sectores en Puerto Rico y Estados Unidos solicitaron al Congreso federal que incluyera nuevamente a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Sin embargo, ese cuerpo se negó a conceder dicho remedio y en su lugar impuso una llamada Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas públicas del país, hacer los ajustes necesarios y garantizar el pago de la deuda. Ello ocurrió sin ningún apoyo

¹⁰ Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, Ley 71-2014, 13 L.P.R.A. sec. 111-113.

¹¹ Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, No 15-233, 195 L.Ed.2d 298, June 13, 2016 (Thomas).

financiero ni asignación especial de fondos federales distinto a estados donde se produjeron otros procesos de quiebra¹².

De haber sido Puerto Rico, un estado, el procedimiento de quiebra establecido por el Gobierno federal aplicaría a sus corporaciones públicas y municipios, los cuales cargaban para 2014, un 70% de la deuda total del gobierno. Sin embargo, como hemos señalado, tanto el Congreso como los tribunales del gobierno estadounidense le negaron al Pueblo de Puerto Rico la aplicación de un mecanismo de quiebra, tanto el legislado por el Gobierno de Puerto Rico como el que existen en el Código de quiebras federal.

Por otro lado, distinto a otros estados, la isla no ha contado con límites constitucionales adecuados para evitar los déficits operacionales del gobierno central y la acumulación de deuda-lo que vino a agravar la pérdida de la sección 936 del Código de Rentas Internas, entre 1996 y 2006.

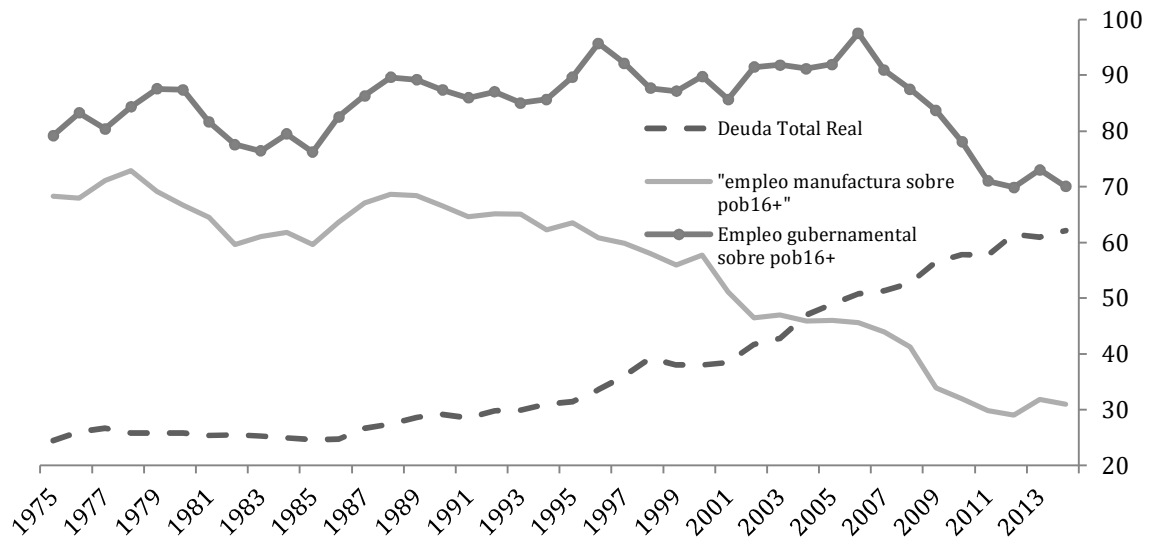
No cabe duda, que la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, sin la creación de una herramienta de desarrollo sustituta, y su desaparición gradual en un periodo de diez años que terminó en 2006, contribuyó significativamente al endeudamiento del país y al inicio de una recesión y luego agravada a depresión económica, que ya cumple más de dieciséis años.

Para comprender cómo Puerto Rico cayó en la situación económica actual, es útil una perspectiva cuantitativa. En la Gráfica 1 se observa como la deuda total real (es decir, ajustada por la inflación) se mantuvo estable desde 1975 hasta 1987 y empieza a crecer vertiginosamente a partir de 2002. Por lo que cualquier teoría válida sobre las causas

¹² Ilustrada en el Informe de la UIPR a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *supra*.

del endeudamiento insostenible debe saber explicar por qué antes de mediados de la década del 90 no hubo problemas de deuda y luego sí.

Gráfica 1, Series de deuda total, empleo gubernamental y empleo en la manufactura



“Real” significa que fue ajustada por el incremento en precios anual o inflación. “Pob 16+” significa la población total mayor de 16 años para el año correspondiente. Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2015)

Véase en la gráfica anterior que la proporción de empleo en la manufactura dividido por la población de 16 años o más decreció de manera consistente desde principios de la década de 1990, cuando ya se anticipaba entre las partes afectadas, el posible final de unos incentivos provistos a las fábricas de capital estadounidense bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal.

Señalan importantes economistas del país en el Informe sobre la deuda y otros, a la Comisión de Derechos Humanos, precitado, que la manufactura es muy importante para explicar el resquebrajamiento de la economía puertorriqueña, ya que en 1995 este sector manufacturero representaba el 42% del Producto Interno Bruto, creó más del 30% de los depósitos bancarios proveyendo liquidez al sistema financiero local y

generando directamente el 17% del empleo, que eran los empleos con mejores salarios en la Isla.

Hay investigaciones bien fundadas que indican que la creación de empleos indirectos, o sea, empleos de empresas que brindaban servicios a estas fábricas) era más del doble del empleo directo creado por las empresas estadounidenses cobijadas bajo la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal¹³.

A pesar de que los incentivos contributivos eran vitales para mantener estas fábricas, en 1996, el Congreso estadounidense eliminó finalmente dicha sección sin que mediara una estrategia para proveer a Puerto Rico una herramienta sustitutiva para reemplazar la pérdida de actividad económica, como pudo haber sido el fortalecimiento del empresariado local¹⁴.

La sección 936 se derogó en agosto de 1996 y se estableció un periodo de gracia de diez años para las compañías que permanecieran en Puerto Rico.

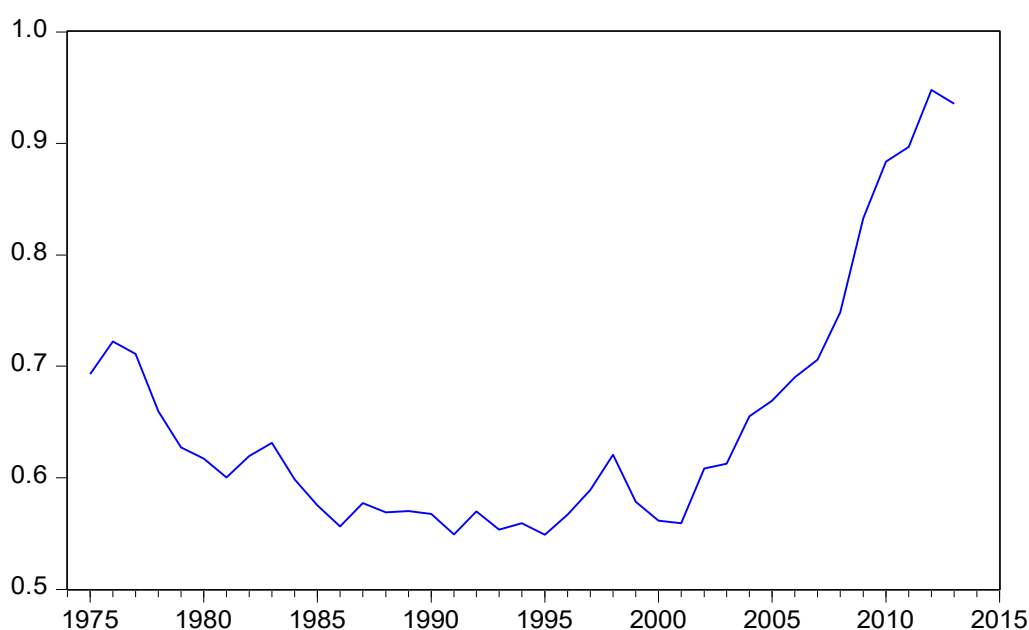
Cuando termina el periodo de transición de la eliminación de la Sección 936 en 2006, es cuando empieza de lleno la crisis económica que desemboca en la depresión actual. La relación entre la desindustrialización de Puerto Rico y la deuda insostenible del gobierno fue verificada mediante diferentes técnicas estadísticas avanzadas. El efecto de dicha pérdida impactó, en términos del ingreso directo e indirecto diferentes sectores de la economía, afectando negativamente los recaudos impositivos al gobierno de Puerto Rico. Esta disminución profunda en los ingresos del gobierno causa que el pago de la deuda sea insostenible dado los servicios a la ciudadanía que el gobierno tiene que sufragar.

¹³ Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *supra*.

¹⁴ *Ibid.*

Cuando el Gobierno de Estados Unidos decide quitarle el motor principal a la economía de Puerto Rico, sin que mediara una alternativa o una explicación razonable que no fuera la presión política interna en esa nación, provocó una reducción significativa en la producción. Los recaudos fiscales comenzaron a bajar, convirtiendo el endeudamiento en uno insostenible. La falta de crecimiento económico y el endeudamiento acelerado, combinado con el bloqueo estadounidense de distintos mecanismos de desarrollo económico y de quiebra son importantes agentes catalíticos de actual crisis de deuda y depresión económica. Véase en la Gráfica 2 la relación entre la deuda pública y el PNB.

Gráfica 2. Proporción Deuda Pública total sobre Producto Nacional Bruto



Fuente: Banco Gubernamental de Fomento (2015)

Como puede apreciarse en la gráfica anterior, para el año fiscal 2002 la deuda pública iniciaba una trayectoria ascendente como consecuencia de una actividad económica que comenzaba ya venía disminuyendo. El incremento rápido en la deuda es

indicativo de que se transformaba en una insostenible y demuestra una disminución de fondos dedicados a los servicios esenciales directos a la ciudadanía. Al ralentizarse la economía no genera los ingresos necesarios para cubrir gastos¹⁵.

Conviene explicar más a fondo, otros factores que en la primera mitad del siglo XX contribuyeron al endeudamiento progresivo de Puerto Rico¹⁶.

Durante el primer término del presidente F.D. Roosevelt, el economista Redford Tugwell, le ayudó a crear e implementar varios programas del New Deal, incluyendo lo que se conoce en inglés como el Agricultural Adjustment Administration, el cual en medio de la depresión económica, pagaba a los agricultores para que no cosecharan alimentos. Más tarde, como gobernador de Puerto Rico, y hombre de confianza de Roosevelt, Tugwell, de inclinaciones económicas socialistas, creó y expandió varias corporaciones públicas. Entre estas se encontraban la Autoridad de Fuentes Fluviales (que se convirtió posteriormente en la Autoridad de Energía Eléctrica, PREPA), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (PRASA), la Autoridad de Transportación (que posteriormente se convirtió en la Autoridad de Carreteras y Transportación, PRHTA), la Autoridad de Tierras y el Banco Gubernamental de Fomento (GDB). El endeudamiento de estas corporaciones públicas, que para la fecha de creación de la Junta de Control Fiscal representaba el 70% de la deuda junto a la deuda de los municipios, también comenzó en el año 1944 bajo la administración de Tugwell.

¹⁵ Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra.

¹⁶ Mark Joffe, supra

Para entonces la Autoridad de Fuentes Fluviales emitió \$20 millones en bonos para adquirir las siguientes compañías conocidas en inglés como la Porto Rico Railway Light and Power Company y la Mayagüez Light, Power, and Ice Company; nacionalizandose así la mayoría de los suministros de transporte, electricidad y energía de la isla. Después de esta emisión inicial de bonos, la deuda de las corporaciones públicas aumentó rápidamente, alcanzando los \$50 millones en el año 1947 y casi los \$100 millones para el 1952. A principios de los años 50, tanto la Autoridad de Transportación como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya también habían comenzado a emitir bonos.

El rápido aumento de la deuda de las corporaciones públicas contrastaba con la escasa deuda que habían acumulado el gobierno insular (que posteriormente se conoce como el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) y los municipios.

La creación en la postguerra de estas corporaciones públicas para brindar servicios de transporte, agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y otros, permitió la creación de deudas insostenibles para el estado; lo que a su vez generó por décadas un exceso de personal gubernamental que conllevó un gasto público inaceptable.

Por otro lado, los bonos municipales exentos de contribuciones crearon como es lógico una gran demanda, pero, a la vez, altos niveles de endeudamiento de los municipios.

Luego de la segunda guerra mundial y la elección de gobernadores del patio, la deuda aumenta siete veces. Ello, sin que Puerto Rico gozara de límites

constitucionales significativos para controlar la deuda, y, privado de herramientas de gobernanza necesarias para atajarla.

La Constitución de 1952¹⁷, facilitó que el país operara con déficits operacionales recurrentes debido a una interpretación acomodaticia de los legisladores del término “rentas públicas” y permitir que se usaran las ganancias por la venta de bonos para cuadrar los presupuestos.

Ya la Ley de Relaciones Federales de 1950¹⁸, había aumentado los niveles de endeudamiento, tomando como base de la valoración de la propiedad inmueble en las ciudades principales.

En 1961 se liberalizó aún más el límite de deuda y posibilitó un mayor endeudamiento si se aumentaban las tasas contributivas e impuestos¹⁹.

Cabe señalar que los límites de endeudamiento creados estatutariamente no aplican a las corporaciones públicas, lo que agravó la situación, ya que éstas arrastraron niveles insostenibles de deuda, cuyos déficits además fueron subsidiados por el fondo general del gobierno.

En síntesis, muchos de los recaudos del gobierno se han venido utilizando para pagar la deuda acumulada a través de subterfugios estatutarios para incrementarla en vez de invertirse en desarrollo económico e infraestructura.

Otro importante factor en la crisis fiscal es, sin duda, La Ley de Cabotaje, impuesta por la metrópoli, que encarece los costos y el precio de los productos que la isla envía a Estados Unidos, ya que éstos solo pueden transportarse en barcos de

¹⁷ Constitución de Puerto Rico (1952), Título 1 Ap. L.P.R.A.

¹⁸ Ley 600, U.S. Congress (1950)

¹⁹ Amendment to the Puerto Rico Federal Relations Act, Pub. Law, 121, 75 Stat, 245 (1961).

bandera norteamericana a un alto costo. Se ha estimado que este goloso estatuto representa 569 millones más en costos de transportación y precios \$1,100 millones superiores que si no existieran^{20 21}. Algunos economistas del patio se han empeñado en defenderla a pesar de que el principal argumento para su desaparición no es tanto económico sino político, por ser una imposición de naturaleza eminentemente antidemocrática en el más estricto sentido colonialista.

Finalmente, la falta de transparencia y corrupción también han sido factores determinantes para la crisis fiscal²².

La Constitución de Puerto Rico, establece hoy día un límite para que el gobierno pueda tomar prestado. Se prohíbe emitir obligaciones directas comprometiendo la entera fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del ELA de Puerto Rico si el monto del principal y los intereses de todas las obligaciones así garantizadas y en circulación exceden el 15% del promedio de las rentas anuales ingresadas al Tesoro de Puerto Rico en los dos años anteriores. Esta restricción es un instrumento diseñado para servir a la ciudadanía puertorriqueña como defensa primordial contra la carga onerosa que resulta del endeudamiento público excesivo. No obstante, hemos visto como el gobierno ha emitido y contraído deuda por sobre este límite constitucional sin que la misma ni siquiera redunde en mayor prosperidad nacional. Se hicieron señalamientos y referidos al Departamento de Justicia sobre posibles esquemas de fraude en algunas de estas emisiones de bonos. Una investigación legislativa detalla un esquema de fraude en la emisión de deuda pública, debido a un

²⁰ Ley Jones, 46 USC 55102.

²¹ Estudio de John Dunham & Associates, citado en “Sin Comillas”, 20 de febrero de 2019.

²² Informe a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra.

patrón de endeudamiento que los inversionistas permitieron con conocimiento de que no existía fuente de repago.

No se efectuó una auditoria “across the board” de la deuda a pesar de un clamor amplio en la comunidad. Ello, habría permitido conocer quiénes son exactamente sus tenedores, para y el efecto real que implica para éstos, y hubiera posibilitado distinguir entre la deuda comprada por los fondos buitres, que a mi juicio ameritan el último escalafón en la prelación, de aquella comprada por fondos de pensiones o cooperativas, a los fines de establecer prioridades en el repago²³.

Como típico remedio salomónico, luego de negarse a permitir que la isla presentara una quiebra federal o a nivel local, el Gobierno federal respondió al problema de la crisis fiscal con una Junta de Control Fiscal, no electa por el pueblo, con poderes casi omnímodos. Muchos conocedores sostienen que, aunque la JCF, ha podido negociar y reducir a esta fecha casi a la mitad la deuda pública, se ha limitado a establecer un clima férreo de recortes y austeridad sin atender los problemas de desarrollo económico del país y haciendo caso omiso de los impactos a nivel humanitario en un Pueblo con un alto índice de pobreza y desocupación, que además ha sido objeto de enormes desastres naturales²⁴. Un análisis a fondo del rol de la JCF en Puerto Rico, su impacto social y su omisión en la encomienda de desarrollo económico, excede la extensión y límite de este ensayo y amerita una pronta atención de los investigadores.

²³ Ibid.

²⁴ Pablo Gluzmann, Martín Guzman y Joseph Stiglitz, *An Analisis of Puerto Ricos’s Debt Relief to Restore Debt Sustainability*, January 2018.

Por otro lado, las pocas ventajas que pudieran atribuirse a la JCF para Puerto Rico, según creada, no comparan como mecanismo con otras juntas similares de varios estados, como por ejemplo Detroit y New York, donde distinto a la isla, los gobiernos estatales han tenido mayor autonomía para reorganizar sus finanzas, y el gobierno federal ha asumido segmentos importantes de la deuda, desvelando, otra vez, el carácter discriminatorio de la relación del Gobierno federal con respecto a Puerto Rico.

A diferencia de lo ocurrido en Puerto Rico, en los casos de NYC y Detroit, junto con la imposición de sus juntas, llegaron desembolsos federales sustanciales para mitigar el impacto de la austeridad y mantener un desarrollo económico mínimo. Aun en NYC, con la resistencia pública del entonces presidente de rescatar la salud fiscal de la ciudad, luego de la imposición de su junta, el gobierno federal comenzó a involucrarse y a desembolsar fondos. Igualmente sucedió con Detroit. La economista Victoria López explica que esto es necesario para la mejoría y el desarrollo de cualquier economía deprimida. Ésta expone que ese no ha sido el caso en Puerto Rico, aun después de la imposición de la Junta. El mecanismo principal de la Junta ha sido recortar presupuestos en casi todas las áreas del gobierno y la economía de la Isla. El resultado de recortar fondos en un país, cuya salud económica y social se encontraba muy frágil, es precisamente la gran emigración de personas jóvenes y productivas. Ello provoca, a su vez, que en la isla haya menos personas produciendo, pagando impuestos y se genere un incremento en la tasa de pobreza. Cuatro años después de la imposición de la Junta, comenzando una pandemia global, uno de cada diez puertorriqueños se encontraba desempleado. El problema

de no invertir, y solo recortar, es que Puerto Rico no está generando riquezas; no es posible una reconstrucción económica del país sin estímulo económico^{25 26}.

A todas luces, resalta la enajenación de Estados Unidos de un involucramiento proactivo, correspondido con la necesaria inyección de fondos para el desarrollo económico de Puerto Rico, y la preservación de los derechos humanos de los puertorriqueños, cuando, fueron precisamente sus decisiones desacertadas a lo largo de 125 años y su trato político y económico discriminatorio los que engendraron y desarrollaron el monstruo de la deuda fiscal.

²⁵ Fabiola Liz Pérez Panblanco, La Promesa de Puerto Rico: Cómo se compara con Detroit y NYC, Revista Jurídica U.P.R., Mayo 2022.

²⁶ Entrevista de Fabiola Pérez Panblanco supra, con Victoria López, Economista de Inteligencia Económica, Inc. , San Juan, Puerto Rico, 31 de marzo, 2022

Bibliografía:

Estatutos:

Jones Act, 39 Stat. 951 (1917)

Ley 600, U.S. Congress (1950)

Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, Ley 71-2014, 13 L.P.R.A. secs. 111-113 (derogada en 2016).

Puerto Rico Foraker Act, sec. 14, 31 Stat. at 80 (1900)

Constitución de Puerto Rico (1952), Título I AP. L.P.R.A.

Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, 48 U.S.C. Secs. 2101-2241 (2016).

U.S. Constitution, Article IV, Section 3, Clause 2, Territories and other Property.

U.S. Bankruptcy Code, Chapter Nine.

Treaty of Peace between United States of America and the Kingdom of Spain

Jurisprudencia:

Balzac vs. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922)

California vs. Torres, 435 U.S. 1 (1978)

Dorr vs. U.S.A., 195 U.S. 138 (1904)

Downes v. Bidwell, 182 U.S. 282 (1901)

Harris v. Rosario, 446 U.S. 1 (1978)

Hawaii vs. Markichi, 190 U.S. 197

Morales v. Bd. of Registration, 33 PRR 76 (1924)

Pueblo v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016)

Torres vs. Puerto Rico, 442 U.S. 465, 470-473 (1979)

Libros o Artículos:

Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad Interamericana, Instituto Caribeño de Derechos Humanos; Informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico, 4 de abril 2016.

Emanuelli Jiménez, Rolando y Colón Yasmín, “Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, 2016, Editorial del Derecho y del Revés.

Gelpí Gustavo, Los Casos Insulares: Un estudio histórico comparativo de los casos Puerto Rico, Hawaii y las islas Filipinas, Revista Jurídica U.I.P.R., Volumen XLV 2:215.

Joffe Mark, Martínez Jesse, El Origen de la Crisis Fiscal de Puerto Rico. Mercatus Research, George Mason University, Abril, 2016.

Marxuach, Sergio, Torres Rosana, Lambda-Nieves Deepak, Centro para una Nueva Economía, PROMESA, un Experimento Colonial Fallido?, 29 de Junio, 2021.

Pérez Panblanco Fabiola Liz, La Promesa de Puerto Rico: Cómo se compara con Detroit y NYC?, Revista Jurídica U.P.R.

Torres, Rosana, Centro para una Nueva Economía (“CNE”) PROMESA, cuatro años más tarde, Septiembre, 2020.

Gluzmann Pablo, Guzman Martin, Stiglitz Joseph, An Analisis of Puerto Rico’s Debt Relief to Restore Debt Sustainability, January 2018.